



**INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
EMBAJADOR CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ ALVARADO
EN OCASIÓN DEL DEBATE GENERAL DEL 81º PERÍODO DE SESIONES
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS**

Nueva York, 25 de septiembre de 2026

(Cotejar conforme a su lectura)

25 de septiembre de 2026

Esta fecha, en la cuenta del Calendario Maya, corresponde al día doce (12) Keme', que simboliza "el renacimiento o el retorno al origen". Este día posee una gran fuerza interior y resiliencia ante los momentos difíciles o los cierres de ciclos.

Para el mundo maya Keme' es la única certeza en la vida: todos nacemos, y la única verdad innegable: es que algún día regresaremos al origen.

Señor Presidente de la Asamblea General;

Señor Secretario General de las Naciones Unidas;

Excelencias;

Distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno;

Señoras y señores:

El sistema internacional que ha orientado nuestras relaciones durante las últimas décadas atraviesa una transformación profunda. Los conflictos, las tensiones geopolíticas, la reducción de los recursos para el desarrollo y la fragmentación de espacios de diálogo ponen a prueba los principios que han guiado la convivencia entre las naciones.

Al mismo tiempo, la democracia enfrenta un doble desafío. Por un lado, el resurgimiento de tendencias autoritarias que pretenden debilitar la voluntad popular, y por el otro, la expansión de redes de crimen organizado que infiltran instituciones, corrompen sistemas de justicia, capturan economías y territorios, y erosionan la confianza ciudadana.

El crimen organizado transnacional no es solamente una amenaza para la seguridad pública. Es una amenaza directa para la democracia, el Estado de derecho y la capacidad de nuestros pueblos de decidir libremente su futuro.

Las redes criminales no reconocen fronteras. Se vinculan a través del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el contrabando, la extorsión, el lavado de activos, los delitos ambientales y otras economías ilícitas. Aprovechan las brechas institucionales, la desigualdad y la falta de oportunidades. Allí donde el Estado se debilita, estas estructuras procuran sustituirlo, intimidarlo o ponerlo al servicio de intereses particulares.

Frente a estas realidades, los principios fundamentales que deben orientar nuestra acción colectiva no han perdido vigencia. Preservar la paz, combatir el hambre y la pobreza, garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, fortalecer la justicia, proteger nuestro planeta y consolidar instituciones democráticas siguen siendo responsabilidades comunes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible continúan siendo una hoja de ruta necesaria.

Es precisamente en momentos como este cuando el derecho internacional, el multilateralismo y la democracia demuestran su valor. El derecho nos proporciona reglas comunes. El multilateralismo permite convertir problemas compartidos en soluciones concertadas. Y la democracia garantiza que el poder emane de los ciudadanos y se ejerza para su bienestar.

Comparezco ante esta Asamblea en nombre de Guatemala, un país que conoce, por experiencia propia, el valor de esas herramientas. Nuestra historia nos ha enseñado que la democracia, la paz y el respeto al derecho no son conquistas definitivas. Se construyen de forma colectiva y cada generación debe preservarlas.

Una democracia se sostiene con elecciones libres, instituciones legítimas, separación de poderes, libertad de expresión, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Pero también exige instituciones independientes y eficaces, comprometidas con la Constitución, la ley y el mandato popular.

Las instituciones públicas no pueden servir a redes criminales, agendas particulares, lealtades personales ni intereses políticos o económicos ajenos al bien común. Deben servir a los ciudadanos, al orden constitucional y a los intereses democráticos de la sociedad. Cuando una institución se aparta de ese propósito, no solo pierde legitimidad: debilita la democracia que está llamada a proteger.

La democracia también se legitima en la vida cotidiana: cuando una familia encuentra protección frente a la pobreza; cuando un niño aprende en una escuela digna; cuando una mujer vive libre de violencia; cuando una comunidad deja de estar aislada; y cuando un joven puede imaginar su futuro sin verse obligado a abandonar su país.

Por eso en Guatemala estamos recuperando la capacidad del Estado para llegar a quienes durante demasiado tiempo permanecieron al margen de las oportunidades. La estrategia intersectorial “Mano a Mano” articula salud, educación, vivienda, nutrición y desarrollo comunitario para enfrentar la pobreza desde el territorio. Frente a pérdidas de cosechas provocadas por eventos climáticos, más de 450 mil familias han recibido asistencia alimentaria, mientras pequeños productores han accedido a semillas, herramientas, insumos y mecanismos de aseguramiento.

La educación pública ocupa un lugar central en ese esfuerzo. Más de un millón de estudiantes han participado en acciones para fortalecer la comprensión lectora. Hemos ampliado oportunidades educativas, impulsado becas, fortalecido la enseñanza en idiomas nacionales y acelerado la transformación digital del sistema escolar. En salud, hemos ampliado y remozado infraestructura, fortalecido servicios regionales y avanzado en la atención integral de enfermedades crónicas y oncológicas.

Además de reactivar proyectos viales y obra pública en comunidades históricamente desatendidas, el Plan Nacional de Conectividad Digital ya incorpora 383 entidades públicas con servicio de Internet. Asimismo, hemos fortalecido sistemas de alerta temprana ante terremotos, tsunamis, inundaciones y amenazas volcánicas.

Recuperar la presencia legítima del Estado también significa brindar seguridad con apego a la ley, fortalecer la prevención, proteger a las comunidades y perseguir las redes criminales, no solo sus expresiones visibles. Significa mejorar la investigación, la coordinación institucional y el seguimiento de los flujos financieros que sostienen las economías ilícitas.

Guatemala sostiene que la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional deben seguir siendo nuestro punto de referencia común. La soberanía y la integridad territorial de los Estados deben respetarse; las controversias deben resolverse por medios pacíficos; los derechos humanos deben protegerse; el derecho internacional humanitario debe observarse en toda circunstancia; y las obligaciones internacionales deben cumplirse.

El derecho pierde su capacidad de protegernos cuando aceptamos que se aplique de manera selectiva.

Las instituciones nacionales e internacionales pierden legitimidad cuando se apartan de su mandato para responder a presiones, cálculos o intereses particulares. Su autoridad proviene de la independencia, la imparcialidad, la transparencia y el apego a la ley.

No puede existir una regla para los poderosos y otra para los débiles. Tampoco puede haber víctimas cuyo sufrimiento nos indigne y otras cuyo sufrimiento decidamos ignorar. Para países como Guatemala, el derecho internacional no limita nuestra soberanía: constituye una de sus principales garantías.

Guatemala cree en la solución pacífica de las controversias. Deposita su confianza en el diálogo, la negociación y los mecanismos previstos por el derecho internacional, porque incluso las diferencias históricas más complejas pueden y deben resolverse por medios pacíficos.

Observamos con profunda preocupación la persistencia de conflictos armados en distintas regiones del mundo y sus consecuencias devastadoras para la población civil. Ante todos ellos, nuestra posición parte de los mismos principios: respeto a la Carta y al derecho internacional; protección de civiles; acceso humanitario seguro; y diálogo y diplomacia como caminos indispensables hacia una paz justa, sostenible y duradera.

No podemos acostumbrarnos a la guerra. No podemos aceptar que la violencia se convierta en una condición permanente de nuestro tiempo, ni que generaciones enteras crezcan pensando que la fuerza es la única manera de resolver nuestras diferencias.

Guatemala aboga por la paz. En diciembre conmemoraremos treinta años de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, que pusieron fin a treinta y seis años de enfrentamiento armado interno. Tras años de negociación, tomamos la decisión de sustituir la violencia de las armas por la búsqueda del diálogo. Y por ello sabemos el valor del acompañamiento internacional y del papel de las Naciones Unidas.

Nuestra experiencia nos permite compartir una convicción: negociar no es una señal de debilidad. Dialogar no significa renunciar a los principios. Buscar la paz nunca puede significar aceptar la injusticia.

También hemos contribuido a las operaciones de mantenimiento de la paz. Más de seis mil trescientos guatemaltecos y guatemaltecas han servido bajo la bandera de las Naciones Unidas en operaciones de mantenimiento de la paz en diferentes regiones del mundo. Un país que conoce el costo de la guerra debe asumir también la responsabilidad de ayudar a otros a preservar la paz.

Señor Presidente,

Debemos fortalecer el intercambio oportuno de información, la coordinación operativa y judicial, la seguridad fronteriza con respeto a los derechos humanos, la protección de puertos y rutas, la investigación patrimonial y financiera, y la recuperación de activos de origen ilícito.

Además, debemos trabajar conjuntamente en la prevención. La seguridad duradera no se alcanza únicamente mediante la acción policial. Requiere educación, empleo digno, comunidades resilientes, instituciones cercanas y oportunidades para las juventudes. Requiere reducir los espacios sociales, territoriales y económicos que las estructuras criminales utilizan para reclutar, controlar y sustituir al Estado.

Nuestra cooperación regional debe basarse en la confianza, la corresponsabilidad y el respeto a la soberanía. No debe servir a agendas particulares ni convertirse en instrumento de intereses ajenos a nuestros pueblos.

El cambio climático, las pandemias, el crimen organizado transnacional, la inseguridad alimentaria, la movilidad humana y la transformación tecnológica exigen cooperación. Guatemala, uno de los países particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, sabe que la adaptación, la gestión del riesgo y la protección de los medios de vida rurales requieren esfuerzos nacionales, pero también financiamiento y una cooperación a la altura de las necesidades y que produzca capacidades y resultados.

Defender el multilateralismo no significa defender el statu quo. Las Naciones Unidas deben ser más eficaces, representativas, transparentes y cercanas a las personas. Deben utilizar mejor sus recursos, reducir duplicaciones y responder con mayor agilidad, sin debilitar aquello para lo que fueron creadas.

La eficiencia debe fortalecer, y no erosionar, sus tres pilares: paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos. La eficacia no puede medirse únicamente en términos administrativos, sino por la capacidad de prevenir una guerra, proteger a una población amenazada, combatir el hambre, enfrentar redes criminales transnacionales o acompañar a un Estado en el fortalecimiento de sus instituciones.

No necesitamos unas Naciones Unidas más pequeñas en propósito. Necesitamos unas Naciones Unidas más fuertes en resultados y más firmes en la defensa de los principios democráticos.



Ministerio de **Relaciones Exteriores**

Esa transformación debe alcanzar también al Consejo de Seguridad. Su composición debe reflejar mejor las realidades del siglo XXI y corregir la subrepresentación histórica de regiones enteras. Cuando el veto conduce a la parálisis frente a graves amenazas a la paz y la seguridad internacionales, la confianza en todo el sistema se resiente.

Nos encontramos, además, ante una decisión importante para el futuro de la Organización: la selección de quien ejercerá la próxima Secretaría General. Guatemala espera que el proceso sea transparente, inclusivo y orientado a identificar un liderazgo independiente, capaz de tender puentes, defender los principios de la Carta y conducir la reforma que nuestra Organización necesita. La región de América Latina y el Caribe está dispuesta y preparada para asumir su responsabilidad con la comunidad internacional. Es el momento de que una mujer latinoamericana asuma el cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas.

Excelencias,

La República de Guatemala reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y la observancia del Derecho Internacional. Nos congratulamos de que la Corte Internacional de Justicia ha señalado las fechas en las que celebrará las audiencias orales sobre el Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice. Esto es más que un simple hito procesal para mi país. Con la notificación de las audiencias, comienza la última etapa procesal antes de la emisión del fallo de la Corte. Representa la culminación de una controversia jurídica que ha acompañado al pueblo de Guatemala, y a sus sucesivos gobiernos, desde el momento de la independencia, y cuya conclusión aguardamos con ansias. Reconocemos que el fallo de la Corte, una vez sea emitido, pondrá fin al diferendo, y confiamos en que brindará certeza jurídica a ambas partes y sentará las bases para un nuevo capítulo en las relaciones entre Guatemala y Belice.



Ministerio de **Relaciones Exteriores**

Para concluir, deseo expresar que Guatemala seguirá haciendo su parte: fortaleciendo instituciones democráticas capaces de responder a nuestra población; enfrentando con determinación al crimen organizado transnacional y a quienes pretenden capturar las instituciones; defendiendo el derecho internacional de manera consistente; promoviendo respuestas regionales basadas en la corresponsabilidad; y apostando por unas Naciones Unidas capaces de transformarse para cumplir la promesa contenida en las primeras palabras de nuestra Carta: “Nosotros los pueblos”.

Recuperar la confianza dependerá de nuestra capacidad de demostrar que, incluso en tiempos de incertidumbre y división, todavía somos capaces de construir juntos soluciones que ninguno de nosotros podría alcanzar por separado.

Muchas gracias.



**STATEMENT BY THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA
AMBASSADOR CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ ALVARADO
GENERAL DEBATE OF THE EIGHTY-FIRST SESSION
OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY**

New York, 25 September 2026

(Check against delivery)

25 September 2026

In the Maya calendar, today's date corresponds to the day 12 Keme', which symbolizes "rebirth, or the return to the origin". This day holds great inner strength and resilience in the face of difficult times and the closing of cycles.

For the Maya world, Keme' is life's one certainty: we are all born, and the one undeniable truth is that one day we will return to the origin.

President of the General Assembly,

Secretary-General of the United Nations,

Excellencies,

Distinguished Heads of State and Government,

Ladies and gentlemen,

The international system that has guided our relations over recent decades is undergoing a profound transformation. Conflicts, geopolitical tensions, declining resources for development and the fragmentation of spaces for dialogue are testing the principles that have guided coexistence among nations.

At the same time, democracy faces a twofold challenge: the resurgence of authoritarian tendencies that seek to undermine the will of the people, and the spread of organized criminal networks that infiltrate institutions, corrupt justice systems, capture economies and territories, and erode public trust.

Transnational organized crime is more than a threat to public security. It is a direct threat to democracy, the rule of law and the ability of our peoples to freely determine their future.

Criminal networks do not recognize borders. They are linked through drug trafficking, trafficking in persons, illicit arms trafficking, smuggling, extortion, money-laundering, environmental crime and other illicit economies. They exploit institutional weaknesses, inequality and a lack of opportunities. Wherever the State is weakened, these structures seek to replace it, intimidate it or bend it to serve private interests.

In the face of these realities, the fundamental principles that must guide our collective action have lost none of their relevance. Preserving peace, combating hunger and poverty, ensuring equal rights and opportunities, strengthening justice, protecting our planet and consolidating democratic institutions remain shared responsibilities. The Sustainable Development Goals continue to provide an essential road map.

It is precisely at moments such as this that international law, multilateralism and democracy show their worth. Law provides us with common rules. Multilateralism enables us to turn shared problems into concerted solutions. And democracy ensures that power comes from the people and is exercised for their well-being.

I address this Assembly on behalf of Guatemala, a country that knows from its own experience the value of these tools. Our history has taught us that democracy, peace and respect for the law are not permanent achievements. They are built collectively, and each generation must preserve them.

Democracy rests on free elections, legitimate institutions, the separation of powers, freedom of expression, public participation, transparency and accountability. But it also requires independent and effective institutions committed to the Constitution, the law and the popular mandate.



Ministerio de **Relaciones Exteriores**

Public institutions must not serve criminal networks, private agendas, personal loyalties or political or economic interests at odds with the common good. They must serve the people, the constitutional order and society's democratic interests. When an institution strays from that purpose, it does more than lose legitimacy: it weakens the democracy it is meant to protect.

Democracy also earns its legitimacy in everyday life: when a family is protected from poverty; when a child learns in a decent school; when a woman lives free from violence; when a community is no longer isolated; and when a young person can envision a future without being forced to leave their country.

That is why, in Guatemala, we are restoring the State's capacity to reach those who have been excluded from opportunities for far too long. The intersectoral Mano a Mano strategy brings together health, education, housing, nutrition and community development to address poverty at the local level. Following crop losses caused by climate-related events, more than 450,000 families have received food assistance, while small-scale producers have gained access to seeds, tools, inputs and insurance mechanisms.

Public education is central to this effort. More than one million students have participated in initiatives to strengthen reading comprehension. We have expanded educational opportunities, promoted scholarships, strengthened instruction in national languages and accelerated the digital transformation of the school system. In health care, we have expanded and refurbished facilities, strengthened regional services and made progress in the comprehensive treatment of chronic diseases and cancer.

Alongside the revival of road projects and public works in historically underserved communities, the National Digital Connectivity Plan now provides Internet service to 383 public entities. We have also strengthened early warning systems for earthquakes, tsunamis, floods and volcanic hazards.

Restoring the legitimate presence of the State also means providing security in accordance with the law, strengthening prevention, protecting communities and pursuing criminal networks, rather than only their visible manifestations. It means improving investigations, institutional coordination and the tracing of the financial flows that sustain illicit economies.

Guatemala maintains that the Charter of the United Nations and international law must remain our common point of reference. The sovereignty and territorial integrity of States must be respected; disputes must be settled by peaceful means; human rights must be protected; international humanitarian law must be observed in all circumstances; and international obligations must be fulfilled.

The law loses its ability to protect us when we accept its selective application.

National and international institutions lose legitimacy when they depart from their mandates in response to pressure, calculations or particular interests. Their authority rests on independence, impartiality, transparency and respect for the law.

There cannot be one rule for the powerful and another for the weak. Nor can there be victims whose suffering outrages us and others whose suffering we choose to ignore. For countries such as Guatemala, international law does not constrain our sovereignty: it is one of its principal safeguards.

Guatemala believes in the peaceful settlement of disputes. We place our trust in dialogue, negotiation and the mechanisms provided for under international law, because even the most complex historical differences can and must be resolved by peaceful means.

We are deeply concerned by the persistence of armed conflicts in different regions of the world and their devastating consequences for civilians. In every case, our position rests on the same principles: respect for the Charter and international law; the protection of civilians; safe humanitarian access; and dialogue and diplomacy as indispensable paths towards a just, sustainable and lasting peace.

We must not grow accustomed to war. We must not accept violence as a permanent condition of our time, or allow entire generations to grow up believing that force is the only way to resolve our differences.

Guatemala stands for peace. This December, we will mark 30 years since the signing of the Agreement on a Firm and Lasting Peace, which brought an end to 36 years of internal armed conflict. After years of negotiation, we chose to replace armed violence with the pursuit of dialogue. That is why we understand the value of international support and the role of the United Nations.



Ministerio de **Relaciones Exteriores**

Our experience allows us to share one conviction: negotiation is not a sign of weakness. Dialogue does not mean abandoning our principles. Seeking peace must never mean accepting injustice.

We have also contributed to United Nations peacekeeping operations. More than 6,300 Guatemalan women and men have served under the United Nations flag in peacekeeping operations in different parts of the world. A country that knows the cost of war must also take responsibility for helping others preserve peace.

Mr. President,

We must strengthen the timely exchange of information, operational and judicial coordination, border security with respect for human rights, the protection of ports and transit routes, financial and asset investigations, and the recovery of assets derived from illicit activities.

We must also work together on prevention. Lasting security cannot be achieved through law enforcement alone. It requires education, decent work, resilient communities, accessible institutions and opportunities for young people. It requires us to reduce the social, territorial and economic spaces that criminal structures exploit to recruit, exert control and supplant the State.

Our regional cooperation must be grounded in trust, shared responsibility and respect for sovereignty. It must not serve private agendas or become an instrument of interests alien to our peoples.

Climate change, pandemics, transnational organized crime, food insecurity, human mobility and technological transformation all demand cooperation. Guatemala, a country particularly vulnerable to the effects of climate change, knows that adaptation, risk management and the protection of rural livelihoods require national efforts, but also financing and cooperation commensurate with the needs, capable of building capacity and delivering results.

Defending multilateralism does not mean defending the status quo. The United Nations must become more effective, representative, transparent and responsive to people. It must make better use of its resources, reduce duplication and respond more swiftly, without weakening the purposes for which it was created.

Efficiency must strengthen, not erode, its three pillars: peace and security, sustainable development and human rights. Effectiveness cannot be measured solely in administrative terms, but by the ability to prevent a war, protect a population under threat, combat hunger, confront transnational criminal networks or support a State in strengthening its institutions.

We do not need a United Nations that is smaller in purpose. We need a United Nations that is stronger in results and firmer in defending democratic principles.

That transformation must also reach the Security Council. Its composition must better reflect the realities of the twenty-first century and remedy the long-standing underrepresentation of entire regions. When the veto causes paralysis in the face of serious threats to international peace and security, confidence in the entire system suffers.

We also face an important decision for the future of the Organization: the selection of the next Secretary-General. Guatemala hopes that the process will be transparent and inclusive, and will identify an independent leader able to build bridges, defend the principles of the Charter and lead the reform our Organization needs. The Latin American and Caribbean region stands ready and prepared to shoulder its responsibility to the international community. The time has come for a Latin American woman to serve as Secretary-General of the United Nations.

Excellencies,

The Republic of Guatemala reaffirms its commitment to the peaceful settlement of disputes and the observance of international law. We welcome the fact that the International Court of Justice has set the dates for the oral hearings concerning the territorial, insular and maritime dispute[C1.1] with Belize. For my country, this is more than a procedural milestone. With the notification of the hearings, the final procedural stage before the Court delivers its judgment has begun. It marks the culmination of a legal dispute that has accompanied the people of Guatemala, and successive Governments, since independence, and whose conclusion we eagerly await. We recognize that the Court's judgment, once delivered, will bring the dispute to an end, and we trust that it will provide legal certainty to both parties and lay the foundation for a new chapter in relations between Guatemala and Belize.



Ministerio de **Relaciones Exteriores**

In closing, I wish to say that Guatemala will continue to do its part: strengthening democratic institutions capable of meeting the needs of our people; resolutely confronting transnational organized crime and those who seek to capture institutions; defending international law consistently; promoting regional responses based on shared responsibility; and working for a United Nations capable of transforming itself to fulfil the promise contained in the opening words of our Charter: “We the peoples”.

Restoring trust will depend on our ability to show that, even in times of uncertainty and division, we remain capable of building together solutions that none of us could achieve alone.

Thank you.